

OCTUBRE 2025

[SOTA FOCUS DIRECTA 593 \[publicado originalmente en catalán\]](#)

VIVIR DESPUÉS DE LA DANA,

La “vuelta a la normalidad” se manifiesta de forma desigual en las comarcas valencianas afectadas por las riadas de hace un año. Mientras la devastación en los hogares, comercios y espacios públicos de los barrios más humildes se mantiene, grandes empresas y establecimientos han recuperado la actividad con el apoyo de ayudas directas, avales y préstamos públicos.

TEXTO: ESTER FAYOS

FOTOGRAFIA: JORGE FABREGAT



El CEIP Carne Miquel del Arrabal de Algemesí (la Ribera Alta) continúa en escombros, pendiente de derrocar y reconstruir a la misma ubicación.

UNA CUESTIÓN DE CLASE

Paseando por el barrio de Orba, en Alfafar (Horta Sur) -conocido popularmente como Parque Alcosa- es notablemente perceptible la devastación provocada por las inundaciones del 29 de octubre del 2024. Un año después, algunos bajos de inmuebles se han rehabilitado, otros empiezan a reconstruirse, y de otros tan solo quedan los muros, la fachada o carteles que señalan que antes había una frutería o una peluquería, pero ahora son solo locales con las persianas bajadas. Queda la escuela todavía por reconstruir, ascensores por arreglar y alcantarillado por limpiar: “Estamos muy lejos de la normalidad que intentan hacer creer. Se han olvidado de la gente más pobre, que no ha podido volver a casa, reabrir los negocios o acceder a las ayudas”, lamenta Fernando Fonzález, vecino de este polígono habitacional, mientras recorre con la mirada la calle de Sedaví, donde vive, en unos bajos que apenas ha empezado a reparar.

González ha recibido los 6.000 euros que otorgaba el gobierno valenciano de Carlos Mazón por la pérdida de bienes de primera necesidad, 9.000 euros del Estado español para compras de muebles y electrodomésticos, y doce meses después todavía espera una ayuda de 20.000 euros por años en la vivienda. “Tendré suficiente porque no pago mano de obra y lo hago todo yo, y además me han dado herramientas de segunda mano”, recalca. Su ejemplo muestra como la dana ha puesto de manifiesto los límites de la clase trabajadora que no tiene suficiente capacidad de ahorro para hacer frente a un desastre imprevisto. Las ayudas, en general, llegan en cuentagotas y demora, y no todo el mundo consigue solicitarlas. “La pobreza hace que mucha gente no haya accedido a todas las ayudas públicas” afirma Joan Hancer, trabajador de Vibra, iniciativa comunitaria del barrio del Raval de Algemés, localidad de la Ribera Alta, y miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de este municipio. Los comités, espacios de participación directa que aglutinan vecinos, empresas y entidades locales, se crearon unos meses después del temporal para encontrar soluciones al estado de destrucción desde los principios de la economía social y solidaria.

EXCLUSIÓN CUBIERTA DE BARRO

Barrios como el Parque Alcosa, formado por viviendas de protección oficial que se construyó en los años sesenta para alojar a una población de clase trabajadora que había llegado a Valencia; o el del Raval, con un vecindario formado mayoritariamente por familias de etnia gitana y migradas, muy castigado por la pobreza, el estigma y el olvido; o el Xenillet de Torrent, una de las barriadas más humildes del municipio, doblemente castigada por el barrio y la miseria, no solo no ha recuperado la normalidad, sino que, con el paso de los meses y la falta de respuesta de las instituciones, han visto como se agravaba la devastación de los hogares, comercios y barrios. Lo hemos comprobado por medio de un trabajo de campo en los tres barrios, ubicados en áreas inundables.

La recuperación inacabada en estas zonas más humildes contrasta con la normalidad ya lograda en el parque comercial de Alfafar o en el polígono industrial de la pista de Silla, donde grandes establecimientos o concesionarios de automóviles han recuperado la actividad económica y la concurrencia. Rut Moyano, vecina afectada y portavoz del CLER de Benetússer (Horta Sur), pone como ejemplo la reapertura de los concesionarios de automóviles de la pista de Silla, como el de Mercedes-Benz o de Kia, tan solo un mes después del paso mortífero de la dana. En Aldaia, la portavoz del CLER, María Jiménez, compara la “rápida” inauguración del centro comercial Bonaire, el pasado febrero, con la lentitud de la administración por lo que en su opinión debería ser prioritario: “re-

construir escuelas, ofrecer una alternativa a quién ha perdido su vivienda o agilizar las ayudas para los más vulnerables”.

El gobierno español es el que ha liderado el repartimiento del grueso de los fondos públicos -propios y europeos- destinados a particulares, trabajadoras autónomas o empresas afectadas, así como rehacer infraestructuras: en total, ha movilizado 16.600 millones de euros, de los cuales, a finales de julio, se habían abonado casi 6.000 millones (el 37%). Cabe destacar que, en la suma global, se incluye como ayuda propia las indemnizaciones del Consorcio de Compensaciones de Seguros, la entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda español que asume la cobertura de los daños en casos de riesgos extraordinarios con un fondo público que se va abasteciendo con un porcentaje de las primas que se firman con las aseguradoras privadas. Si se descuenta esa cuantía delo global abonado, los gastos en ayudas directas desciende a los 2.552 millones. En número de solicitudes, de las 448.922 presentadas, 320.108 se encuentran en proceso de tramitación, según datos oficiales.

Por su parte, la Generalitat Valenciana anunció poco después del desastre una aportación propia de 2.364 millones de euros para actuaciones de emergencia y recuperación durante el 2025. De esta suma, 772,5 millones se han reservado a ayudas directas. En agosto, según los datos solicitados por la Directa a través del Portal de Transparencia de la administración valenciana, se habían abonado 283,2 millones de euros en ayudas (el 36% del total anunciado) y un 87% de las solicitudes se habían concedido. Según la información disponible, no se habría agotado todo el fondo porque el número de solicitudes no habría llegado al presupuesto previsto. A principios de septiembre, Carlos Mazón sacaba pecho de su gestión, y presumía de haber proveído de “apoyo económico y directo” para “una recuperación que tiene que llegar a todos”.

Lejos de esto, a la práctica, Júlia Martí y Marta Pérez Fargas, integrantes del Observatori del Deute en la Globalització, organización que ha investigado el destino de los fondos públicos destinados a la reconstrucción de los efectos de la dana, aseguran que “las ayudas a la población son insuficientes y no llegan con la urgencia necesaria”. Por contra, añade Martí “las ayudas a las grandes empresas se han ejecutado con celeridad y con unos importes que dependen más del volumen de la facturación que de la afectación. Es decir, empresas transnacionales con beneficios millonarios que han recibido centenares de miles de euros en ayudas”, detalla la investigadora. Este medio ha solicitado datos al gobierno español en relación a las multinacionales que se han beneficiado de las políticas públicas -ayudas directas, bonificaciones fiscales de reducción o exención de impuestos o suspensión del pago de intereses de créditos pendientes- en respuesta a los daños de la dana, y también sobre el reparto de los fondos a pequeñas y grandes empresas y en barrios con menos y mayor renta por cápita. Esta información ha sido denegada argumentando que algunos datos “tienen carácter reservado” y otras que “no disponen de esos datos”.

AYUDAS Y AVALES MILLONARIOS

Algunas multinacionales afectadas por la dana tienen un papel similar al de los bancos durante la crisis del 2008 o al del sector turístico después de la pandemia: en un momento de inestabilidad se benefician de las políticas públicas para ser rescatadas, en este caso a escala local. La cantidad de dinero no retornable que la administración del Estado español puede destinar a empresas afectadas oscila entre los 10.000 euros –para sociedades con una facturación inferior al millón de euros anual– y 150.000 euros, en caso de sociedades mercantiles que facturan más de 10 millones el año. Esta es una de las líneas de ayudas sobre las cuales sí que es posible obtener información pública sobre cómo se ha repartido. Resiguiendo el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que forma parte del Ministerio de Hacienda español, se puede averiguar el nombre de algunas de las firmas que han recibido 150.000 euros y, tal como hemos comprobado,

ya han recuperado la actividad en las zonas devastadas. Hablamos de nombres como Heineken, Adidas, Kiabi, Decathlon, Sprinter, Consumo, Danone, Ford o Renault. “El gran comercio, las grandes cadenas de distribución, como Mercadona, se ha recuperado, mientras que tiendas como la zapatería Dauden, la panadería Molins o la floristería Carceller continúan cerradas”, constata Maria Jiménez mientras nos muestra las huellas del desastre en su municipio, Aldaia (Horta Sur), que se inundó casi por completo a causa del desbordamiento del barranco de la Salita.



Decathlon, en el parque comercial de Alfafar (l'Horta Sur), es una de las multinacionales que ha recibido 150.000 euros en ayudas directas.

Con un volumen de facturación millonario, el grupo de casinos y salas de juego Acrismatic, las cimiteras Aristaria SL o la cimentera de matriz turca Cimsa –que se convirtió en líder mundial en producción de cemento blanco al adquirir la filial española de la mexicana Cemex, que incluía la cimitera de Buñol–, la aerolínea Air Nostrum, la empresa multiservicio Clece (que pertenece al Grupo ACS, la constructora por Florentino Pérez que cotiza en el IBEX-35), la mercantil de recogida de residuos de la familia Gimeno Calabuig (Fovasa) o el grupo constructor y de servicios FCC, son algunas de las grandes beneficiadas con ingentes ayudas públicas directas. También encontramos Simetría Fidentia SL, constructora propiedad al 50% del fondo de inversión valenciano Atitlan, liderado por los inversores Aritza Rodeno y Roberto Centeno, yerno de Juan Roig. Rodeno y Centeno fueron consejeros del Goldman Sachs, entidad financiera reconvertida en banco comercial para poder recibir apoyo financiero público en la crisis de 2008.

Júlia Martí lee estas concesiones como “la manera que tiene el Estado de mantener el funcionamiento del sistema capitalista”. “Esto pasa –añade– porque, incluso desde partidos que se presentan como progresistas, se asume que la manera de velar por el bienestar de la población es haciendo que la rueda capitalista no pare, que el crecimiento no se estanque. No se cuestiona que las grandes empresas sean rescatadas, ni se les establecen obligaciones, como garantizar puestos de trabajo o fomentar una reconstrucción adaptada al cambio climático”. En este sentido, Maria Jiménez se mues-

tra contundente: “no se tendrían que rescatar empresas que facturan lo suficiente para permitirse la reconstrucción por sí solas”, concluye.

Pero además de la inyección de dinero sin ninguna contraprestación, las empresas también pueden acceder a avales de entidades financieras públicas, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Creado como banco público en 1971 y adscrito al Ministerio de Economía, el ICO es el organismo encargado de administrar créditos y avales del Estado, los cuales son gestionados por bancos privados que actúan de intermediarios y deciden a quién concederlos. En caso de que la compañía beneficiaria no pueda devolverlos, es el Estado quien asume el grueso de la pérdida (un 80%); el 20% repercute en la financiera gestora. “Es decir —explica Nicola Scherer, investigadora del ODG que ha examinado la actividad del ICO— son préstamos altamente favorables, fundamentados en una lógica basada en privatizar beneficios y socializar pérdidas, a pesar del riesgo de endeudamiento público”.

El sector del automóvil ha sido uno de los principales beneficiados con avales y préstamos del ICO. Filiales de Mercedes-Benz, como Valencia Distribuidora Angal Automoción SL; mercantiles como Industrias Alegre SL, proveedora de marcas como Ford o Stellantis (conglomerado de la industria de la automoción), o concesionarios como Marcos Automoción, el grupo más grande del País Valencià, han recibido avales de hasta dieciséis millones de euros. Empresas del sector de la construcción o la fabricación de biocombustibles, del ámbito agroalimentario, donde aparecen diversas sociedades proveedoras de Mercadona y otras grandes cadenas de distribución; o incluso el centro comercial Bonaire, también han accedido a avales millonarios.

Nicola Scherer enfatiza que, tal como pasó con la covid-19 y después con la dana, el reparto de los créditos y avales muestra como “hay una tendencia a rescatar grandes empresas, porque tienen más capacidad para pedirlos, mejores contactos con bancos privados y más credibilidad financiera para devolverlos”. Por eso, esta investigadora considera necesario diseñar otro sistema de reparto, “con criterios ambientales para evitar rescatar las empresas que nos han llevado a una situación de emergencia climática, y criterios sociales y económicos para identificar quién necesita más ayuda y no la está recibiendo”.



Javier Bort, propietario de una tienda de pinturas de Catarroja (l'Horta Sur), no ha podido reabrir el local.

Uno de los testigos que refleja las dificultades de algunos actores para acceder a las ayudas es el de Javier Bort, propietario de una tienda de pinturas en Catarroja (Horta Sur) que no ha podido reabrir. Con 54 años, Bort forma parte de la tercera generación familiar de un negocio que el agua inundó por completo hace un año. Los daños eran tales que tuvo que habilitar su garaje, donde el barro “solo” llegó hasta 1,30 metros, como solución provisional para continuar despachando. “Mi prioridad era llegar a final de mes. A partir de ahora, con la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros y una donación privada de Cruz Roja, iré reparando la tienda, pero como mínimo hasta dentro de un año no podré volver”, estima.

Bort no solicitó ninguna ayuda directa, ni a la Generalitat ni al Estado. “Las primeras solo me cubrían el 50% y ambas administraciones exigían muchos requisitos y presentaban muchas dificultades burocráticas para quienes no tenemos personal administrativo. Las grandes lo pueden asumir, pero las pequeñas estamos perdidas”, lamenta. En cuanto a los préstamos de bancos públicos, reconoce que no quiso hacer ningún movimiento que “supusiera un riesgo. No tengo los conocimientos ni soy una gran empresa que se puede permitir tener pérdidas. Solo quiero resistir hasta que me jubile”, deja claro.

Una tipología parecida presenta el caso de Fernando Moreno, quien administra un quiosco y el bar Tio Fen del Raval de Algemés. A pesar de no recibir ninguna indemnización porque no pagaba seguro, ha podido recuperar el quiosco “gracias al apoyo humano y económico de la gente y a una ayuda pública estatal de 5.000 euros por el hecho de ser autónomo”, señala. Ha intentado solicitar otras ayudas destinadas a rehacer el pequeño comercio, pero cuando fue a tramitarlas se encontró que el plazo había expirado en febrero de 2025. “Tenías que estar muy pendiente y aquí estuvimos

sacando barro durante meses, sostiene. El bar todavía no lo ha reabierto y no sabe si lo podrá hacer: “Lo tenía alquilado y el actual propietario creo que no tiene interés en reconstruirlo”.

Laia Garcia i Jordi Cabezas, de la librería Somnis de paper de Benetússer, han resultado ser más afortunadas. “El Ministerio de Cultura actuó enseguida”, reconoce Garcia. En su caso, accedieron a ayudas estatales y autonómicas destinadas a rehacer el sector cultural y contaron con el asesoramiento de un técnico. En total, recibieron 29.575 euros del Estado y 60.000 de la Generalitat. Con todo, la suma de las ayudas y la indemnización del Consorcio no les cubría una pérdida de “más de 110.000 euros” e intentaron, sin éxito, pedir apoyo al Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial. “Nos encontramos con muchas dificultades, como tener que contratar un auditor, que las pequeñas empresas no podemos asumir”, lamenta.

SIN VIVIENDA DIGNA

El gobierno español ha recibido 43.637 solicitudes de acceso a ayudas para paliar daños personales y materiales en la estructura de viviendas o comunidades de propietarios, cubiertos exclusivamente por el Estado. La Generalitat, a su vez, ha destinado dinero a ayudas al alquiler, demolición de viviendas y adquisición de nuevas. A mediados de septiembre, el Estado había repartido 92 millones de los 120 previstos inicialmente, a pesar de que, según fuentes del departamento de prensa del Ministerio del Interior, “la partida está en constante ampliación en función de los informes de daños analizados”. Sin embargo, Rut Moyano critica la lentitud en la distribución de estos fondos que, a su parecer, eran “de extrema prioridad”: “Continuamos con mucha incertidumbre, viviendo pisos o en plantas bajas con daños estructurales graves. Hay mucha gente que no tiene acceso a una vivienda digna. Es inadmisible”, concluye.

Moyano vive en Benetússer, en un edificio de cuatro plantas donde el agua llegó hasta la primera y un coche impactó en el portal. Hoy, todavía con el garaje, la entrada y el ascensor sin arreglar, conviven con humedades, grietas y falsos techos que caen. Los daños al inmueble se calculan en unos 235.000 euros y hasta agosto solo habían cobrado un 20% de esta cantidad del Consorcio de Compensación de Seguros, que destinaron a los arreglos más urgentes, como los contadores de luz o la bomba de agua. A fecha de octubre de 2025, les falta cobrar un 10% del presupuesto total. Del mismo modo que en otros edificios de la zona, el ascensor de la finca todavía no funciona, hecho que dificulta la actividad de gente mayor o con movilidad reducida. “Tenemos un vecino que solo puede bajar a la calle un día al mes, cuando viene Cruz Roja”, denuncia. Según Moyano, se trata de una problemática que no afecta a todo el mundo por igual: “las empresas están colapsadas y nos dicen que no tienen disponibilidad o que les faltan piezas. No lo dudamos, pero curiosamente los ascensores de los centros comerciales de Alfafar y Aldaia han vuelto a funcionar”, compara.

La recuperación de los hogares va mucho más lenta cuanto más humilde sea el barrio. Es el caso del conjunto de casas ubicadas en las calles de Murcia y de Albacete de Torrent (Horta Sur), antes de llegar al Xenillet y justo al inicio del barranco del Poio. A las problemáticas habituales de las zonas afectadas, se suma “la marginación total en la que se vive”, afirma Maria Jiménez, quien se traslada periódicamente de Aldaia a Torrent para acompañar el vecindario. La mayoría de habitantes no cuenta con seguro de hogar y, por lo tanto, no ha recibido compensaciones del Consorcio. Solo han ingresado la ayuda de 6.000 euros de la Generalitat, los 10.000 del Estado por pérdida de enseres, y algunas donaciones privadas.

Consolación Dual es una de las afectadas de la calle de Murcia, donde vivía, en una casa ubicada en el lecho del barranco prevista por derrocar. En total, el Ayuntamiento asumirá la demolición de 45 viviendas “por el alto nivel de peligrosidad del lugar”. Las familias son conscientes y no se oponen, pero denuncian que afrontan el proceso sin información, sin saber si recibirán indemnizaciones y que las propuestas de realojamiento no se han formalizado por escrito. En el caso de Dual, asegura

que recibió informaciones contradictorias sobre el estado de afectación de la casa: “Vino un técnico del ayuntamiento que decía que podíamos volver, pero no nos entregó ningún papel que lo certificara y, en la prensa, el Ayuntamiento hablaba del riesgo que suponía vivir en ellas”. A la espera de recibir una ayuda estatal de 60.000 euros por destrucción total de la vivienda, de momento, Dual vive en un piso cedido por una ONG, donde tiene que renovar la autorización cada tres meses.



Consolación Dual, vecina de la calle de Murcia de Torrent (Horta Sur), continúa a la espera de recibir una ayuda de 60.000 euros por destrucción de la vivienda.

Una situación similar travesía Amparo González, quién permanece en su piso de la calle de Murcia a pesar de tener el pasillo entre el comedor y el baño apuntalado por el riesgo de derrumbe. “Primero me dijeron que se tenía que derrocar, después que era suficiente con reforzarlo... Lo que tenemos claro es que no podemos vivir en él”, manifiesta, preocupada por el destino de los realojamientos. Desde el consistorio de Torrent se asegura que han ofrecido uno alojamiento a las familias y que se continúa trabajando “para que puedan vivir cerca de su entorno”.

Otro de los testigos que muestra como la vuelta a la normalidad está marcada por un claro sesgo de clase es el del matrimonio formado por Paco Ramírez i Maria Garcia, de 70 y 68 años, respectivamente. Ahora mismo tienen que afrontar una deuda hipotecaria de 21.000 euros por una casa que no podrán recuperar. Vivían en la avenida de Carlet, una calle de Algemesí situada en el lecho mismo del río Magro, en el cual el agua inundó por completo unas veinte plantas bajas. Dado el riesgo que supone la ubicación, el Ayuntamiento ha aprobado expropiarlas y destinar los terrenos a vial público y zona deportiva a cambio de una compensación económica. Ramírez y Garcia recibirán 22.741 euros, una cifra que consideran “irrisoria”, como también la indemnización del Consorcio (33.461,43 euros), teniendo en cuenta que la aseguradora valoraba su casa en 150.920 euros.

Ramírez y Garcia no han recibido ninguna ayuda directa por daños en la vivienda, porque “no sabíamos cómo pedirla”, confiesa Garcia. En este sentido, critica la carencia de asesoramiento y información: “Aquí hacían falta técnicos del Ayuntamiento que tocaran puerta a puerta y nos explicaran

qué teníamos que hacer”. Con todo, todavía se sienten “afortunados” porque “no nos hemos quedado sin techo, tenemos otra casa en el Raval”, aclaran. Aun así, el bajo de esta finca, donde tenían el garaje y una cocina, también resultó dañado, y sin ninguna ayuda ni la protección financiera de una aseguradora no saben cuando lo repararán.

Algunos hogares situados a primera línea de barrancos han tenido más capacidad económica para afrontar una catástrofe. A diferencia de las familias del Raval o el Xenillet, algunas vecinas que viven en el lecho del barranco del Poio en Picanya han podido rehacer las viviendas o iniciar los trámites de la reconstrucción, a pesar de que no saben qué futuro se les presenta, porque el Ayuntamiento ha dictado recalificar el suelo como zona verde. Es el caso de José Espinosa, quien encargó el proyecto de reconstrucción de su vivienda y pidió la licencia de obras, denegada por la peligrosidad del emplazamiento. “Más allá del miedo de perder nuestras casas y nuestro lugar, lo que nos duele es la falta de información”, critica. De momento, el Ayuntamiento ha expresado su voluntad de “dar respuesta a las diferentes situaciones”, “velar por la seguridad” y “tramitar alternativas”.

BARRIOS OLVIDADOS

La devastación de los barrios más humildes persiste también fuera de las casas: parques y servicios públicos sin reconstruir, calles levantadas por la fuerza del agua o bajos abandonados acumulando residuos, son todavía un paisaje habitual en muchos lugares. El gobierno español ha concedido a los ayuntamientos de los municipios afectados ayudas de entre 2 y 200 millones de euros para rehacer infraestructuras, un presupuesto que cuesta movilizar por la carencia de personal técnico municipal y que, además, según Joan Nacher, “se está invirtiendo a dos velocidades y de manera discriminatoria”.

Nacher hace referencia a la “falta de inversión” en los barrios con índices de pobreza más elevados, y pone como ejemplo su municipio: “Si andas por Algemesí casi no ves las cicatrices del temporal, en cambio, en el Raval la dana persiste duramente”. Este barrio solo disponía de tres infraestructuras públicas que han quedado devastadas: el centro de participación ciudadana, el colegio de educación infantil y primaria y la escolita. “El centro está cerrado, el colegio lo sustituyen por barracones y la escolita la han trasladado al centro cultural, un espacio pensado para adultos donde los niños tienen que orinar en orinales”, denuncia Jacinta Domínguez, directora de la escolita. El ayuntamiento ha explicado que los tres espacios se derrocarán y se construirán de nuevo siguiendo criterios antiinundación para garantizar la seguridad, una decisión que Nacher cuestiona: “construirlos en el mismo lugar no es la solución”.

La falta de limpieza del alcantarillado y de los forjados sanitarios –cámaras de aire bajo algunos edificios para aislarlos de la humedad– es otra de las problemáticas que se han detectado. Doce meses después, muchos forjados continúan llenos de barro, una situación que en barrios como el Parque Alcosa afecta a la mitad de los inmuebles. Además del riesgo de infecciones y de los daños estructurales que puede provocar esta acumulación, desde los comités locales hay preocupación por cómo se afrontarán las lluvias de este otoño. “Corremos un riesgo enorme porque ahora el agua puede subir mucho más fácilmente”, alertan.

Para paliar estos sesgos de clase en la reconstrucción, en palabras de Andrea Ariza, urbanista y antropóloga de la cooperativa La Dula, “el apoyo institucional no se puede limitar a ofrecer ayudas económicas, dejando la responsabilidad de reconstrucción o reparación en manos de particulares”. Considera que es necesario que la administración intervenga de manera directa para resolver lo que genera más vulnerabilidad “y que lo haga con principios de la economía social y solidaria”. En la misma línea se expresan María Jiménez y Rut Moyano, quien concluye: “Cuestiones como la vivienda, la limpieza de los forjados o la reparación de ascensores nos las tenemos que resolver nosotros mismas, pero no todo el mundo tiene capacidad para hacerlo”.



El centro comercial Bonaire, en Aldaia (Horta Sur), ha sido una de las empresas beneficiadas con avales del Estado que ha recuperado la actividad.

La portavoz del comité por la recuperación de Aldaia, Maria Jiménez, compara la “rápida” inauguración del centro comercial Bonaire, en febrero, con la lentitud a la hora de “reconstruir escuelas u ofrecer una alternativa a quien ha perdido la vivienda”.